

embargo de unos bienes consistentes en maíz, una carretela, un tronco de mulas y demas objetos enumerados en dicho exhorto. Vistos los informes de los jueces competidores; lo pedido por el Sr. fiscal en apoyo de la jurisdiccion del Juez de México; oído lo alegado al tiempo de la vista por el Lic. Saavedra, en apoyo de la jurisdiccion del Juzgado requerente, y lo expuesto en la misma por el Lic. Fuentes Ignacio como patrono y apoderado de D. Diego Rodriguez Sarro en favor de la jurisdiccion del Juez 2º de lo civil de esta capital, con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino. Considerando: que segun el tenor literal del artículo 1699, aplicable en este caso, supuesto que los vecinos del Distrito federal gozan de los derechos que el Código civil les otorga, se dispone que: "Si al ejecutar los autos insertos en las requisitorias, se opusiere por su propio derecho algun tercero, el Juez al ejecutar, oirá sumariamente y calificará las escepciones opuestas; en cuyo supuesto se halla precisamente la oposicion que han presentado los poseedores de los bienes que se han mandado embargar por el Juez de Cuautitlan en el exhorto á que los presentes autos se refieren; de conformidad con lo pedido por el Sr. fiscal, se decreta; primero: es competente el Juez 2º de lo civil de esta capital, para conocer de la oposicion que al embargo de los bienes decretado por el Juez de Cuautitlan y mandando llevar á efecto por requisitoria del mismo, fecha 24 de Octubre próximo pasado, han hecho los opositores presentados al referido Juzgado 2º de México. Segundo: Remítanse las actuaciones al Juzgado 2º de lo civil de esta capital, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Remítase copia igual al Juzgado de Letras de Cuautitlan para su conocimiento.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los estados Unidos Mexicanos y fir-

maron.—Presidente.—*José María Iglesias.*—Magistrados.—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Lando,* secretario.

Es copia. México, Febrero 2 de 1874.
—*Alejo Gomez Eguiarte,* oficial segundo.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito del Estado de Michoacan contra D. Francisco Ruiz Gaitan, por defraudacion de fondos al Erario federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Letras.

Con la propia confesion del reo visible en su declaracion preparatoria, con las declaraciones de los testigos del sumario y con otras muchas constancias procesales, aparece plenamente probado, que D. Francisco Ruiz Gaitan recibió en comision del C. General D. Manuel García Pueblita, una gran cantidad de reses, que pertenecia al fisco federal, en virtud de que formaban parte de los préstamos que aquel Gefe imponía con facultades superiores, para atender á las necesidades de la guerra, que entonces sostenia el Supremo Gobierno con el partido reaccionario.

En virtud de tales constancias, el expresado Ruiz Gaitan fué declarado reo de hurto con circunstancias agravantes; pues que habiendo recibido las expresadas reses, habiéndolas vendido todas ellas, y no habiendo entregado su importe ni al C. General Pueblita durante su vida, ni al Erario federal cuando ya fué muerto, se contrajo una gran responsabilidad civil, así como tambien se hizo reo del delito supradicho, por lo cual se le ha procesado y declarado bien y formalmente preso.

Para desvirtuar los cargos que se le hicieron, y eludir su expresada responsabili-

dades, ha presentado varias pruebas, que con el debido detenimiento pasa á examinar este Ministerio.

Presenta en primer lugar el reo, algunas cartas y documentos que se dice ser escritos por el C. General Pueblita, y á los cuales el Promotor los redarguye de civilmente falsos; á las primeras, por faltarles el sello del correo del lugar de donde se suponen remitidas, y á los segundos, por no estar en el papel sellado correspondiente; y no mereciendo fé ninguna por lo mismo, en juicio ni fueral de él, conforme á las terminantes disposiciones de la renta del papel sellado.

Acerca del valor jurídico de los instrumentos particulares, dice entre otros civilistas el Febrero Mexicano en el párrafo 20, página 220 del tomo 3º: "Instrumentos privados, son los que no contienen autorización ni solemnidad alguna, como los vales, pagarés, cartas y libros de cuenta. Estos instrumentos no hacen fé en juicio si se los redarguye de falsos, á no ser que los reconociese el que los hizo ó firmó, ó en defecto de este reconocimiento ó por su negativa, se prueba su certeza por dos testigos á lo menos, mayores de toda excepción, quienes bajo juramento declaren *que los han visto firmar*. Sin esta solemnidad no hará prueba plena en juicio el instrumento privado, aun cuando se coteje con otros que se tengan por verdaderos, ó declaren algunos testigos que les parece legítimo, por haber visto firmar muchas veces al sugeto que lo suscribía."

Funda su doctrina este civilista, en el texto expreso de la ley 119 título 18 part. 3ª que dice á la letra: "E si por aventura non le demandase esta jura, mas dícese que lo quería probar en esta manera, mostrando otra carta que es verdaderamente escrita por mano de aquel mismo, que es semejante en todo ó en la letra, ó en la forma de aquella que él muestra contra él; en tal caso como este decimos *que non debe ser creído*; fuerasen de, si pudieran probar por dos testi-

gos buenos sin sospechas, *que el otro fiso aquella carta, ó la mandó escribir*".....Y mas adelante....."Si aquel que aduce la carta para probar con ella su intención, probare con dos testigos buenos ó sin sospecha que juren ó digan, *que vieron aquel cuyo nombre está escrito en ella, hacer aquella carta, ó mandarla escribir*, decimos que probándolo así debe ser creído."

Hé aquí pues, que no estando tales cartas y documentos privados reconocidos por el C. General Pueblita personalmente, ni declarando los testigos presentados por Ruiz que vieron firmar á dicho C. General tales cuentas ó documentos, ó que los haya mandado escribir, pues ni podrían declarar tal cosa, supuesto que ellas se suponen escritas en Punaúndiro donde no se encontraban los testigos, no hacen prueba conforme á la ley citada y á la doctrina transcrita.

Ademas, no puede estimarse la prueba de Ruiz como un cotejo de letras, para que formara á lo menos prueba sencilla, puesto que no se han cotejado las cartas con otras cuyo autenticidad sea incontestable, ni se ha hecho tal cotejo por calígrafos, como lo quiere la ley cuando dice: "...E si por aventura el Escribano non fuese vivo, ó fuese en tan lucie tierra, que non lo pudiesen aver para hacer esta pregunta (la concerniente al reconocimiento) entonces debe el juzgador tomar á mas las cartas, haber buenos omes ó sabidores consigo, que sepan bien conocer, ó estender las formas, ó las figuras letras, ó los vanamientos de ellas; ó débelos hacer jurar, que esto cuten ó escudriñan bien ó lealmente, ó que non dejen de decir verdad de lo que entendieren, por ruego ni por miedo, nin por amor, nin por desamor, nin por ninguna otra razón."

Los testigos presentados por Ruiz, ni son por su profesion peritos en la materia, calígrafos prácticos, ni hicieron cotejo alguno de las cartas presentadas por aquel, con otras cuya autenticidad fuese reconocida; en consecuencia, como se ha dicho al principio, no puede estimarse tal prueba como

un cotejo de letras, y por lo mismo, ni como prueba semiplena puede estimarse.

Si los testigos no declararon haber visto al Sr. Pueblita escribir tales cartas, si calígrafos inteligentes no hicieron cotejo alguno de letras, resulta que conforme al testamento de las leyes citadas, no hacen fé ninguna en el presente juicio las relacionadas cartas, las cuales no cuentan ni aun para probar su autenticidad, con el sello del correo de donde se supone que vinieron dirigidas.

En cuanto á los demas documentos, principalmente como el número dos, á mas de no estar tampece reconocido, tiene la visible nulidad de no estar en el papel sellado correspondiente; y por lo mismo, conforme á las leyes vigentes sobre la materia, no hacen fé en juicio ni fuera de él.

A este respecto dice la ley general de 14 de Febrero de 1856, lo siguiente: "Artículo 53. Ningun documento que no esté extendido en el papel sellado respectivo, podrá hacer fé en juicio á favor del infractor, ni de sus cómplices; teniéndose por tales, aun á los que hayan concurrido por *simple admission del documento*;" y mas adelante: "artículo 55. Las autoridades, tribunales, jueces que no reclamen la infraccion cometida en algun escrito ó documento que oficialmente se les presente, serán responsables al reintegro y al duplo de lo que este importe;" y en fin, en el artículo 57: "Los secretarios, escribanos, notarios, oficiales y empleados á quienes compete recibir los instrumentos escritos, *documentos*, ó dar cuenta con ellos á su gefes, ó á la autoridad competente, serán responsables al reintegro y al cuádruplo, ademas de lo que este importare, por el solo hecho de recibir tales piezas ó darles curso cuando no se hallen extendidos en el papel sellado que corresponda conforme á las disposiciones de este decreto."

Segun estas disposiciones terminantes de una ley vigente entre nosotros, no se debió admitir ni darle curso al documento núm. 2 presentado por Ruiz, puesto que tal documento es de finiquito de deuda, aunque

TOMO V.—PARTE II.

mal puesto; y para los efectos de la multa y penas á que se contraen los artículos citados, debe estimarse su importe por el de la cantidad de que trata Ruiz de libertarse con él.

Tampoco se debió admitir ni dársele curso al documento presentado por Don Ignacio Alva con el carácter de liquidacion, el cual debió tambien ser extendido en el papel correspondiente de cuentas; y puesto que no se hizo así y que se admitió y se le dió curso indebidamente, debe exhibirse la multa y hacerse efectivas las demas penas que establece la ley citada, tomando por base para ello, la cantidad á que tal documento se contrae.

Segun pues lo determinado en el artículo 53, ninguno de tales documentos ni el número 2 presentado por Ruiz, ni el exhibido por Alva, hacen fé ninguna en juicio.

No pueden estimarse, en consecuencia, como prueba á favor del procesado tales documentos, por no hacer fé ninguna en el presente negocio.

Aun cuando la hicieran, había que notar todos los defectos que contienen en su formacion tales documentos.

El número 2 no especifica ni determina de qué cantidad se dá por pagado el Sr. Pueblita, el número de reses á que se contrae, ni la forma con que él ha hecho el pago. La misma vaguedad lo hace sospechoso, y la generalidad de sus términos lo constituye en imperfecto.

Puesto que segun dice Ruiz, tuvo varios negocios con Pueblita, no puede saberse á que reses se refiere ese documento, si á las que dieron materia á este juicio, ó á otro diverso; si recibió su importe en dinero efectivo ó en valores, pues Ruiz afirma que con el valor de las reses se pagó el importe de una casa que le enagenó, sin embargo de que segun aparece de las cartas que él pretende se tengan como prueba, Pueblita le mandó dinero en efectivo para el pago de la casa.

El documento pues, está vago, indeterminado.

nado, indefinido, y por lo mismo no podría hacer fé, aun cuando estuviera en el papel sellado correspondiente.

Ahora tambien; si es cierto que Pueblita le pagó con reses á Ruiz el valor de la casa ¿donde está la escritura en que conste que aquel haya comprado á este tal ó cual finca, y de que se haya dado por pagado con el valor de tantas mas cuantas reses, ó razon de este ó del otro precio? ¿porque no exhibió Ruiz tal escritura?

Ademas, ese documento que se quiere llamar *liquidacion*, no tiene verdaderamente tal carácter, pues que no se vé en él mas que varias partidas de ganado que confiesa Ruiz haber recibido, conteniendo al fin una razon de que entregó algunas de ellas al Sr. Lopez: ¿y donde está el recibo de este Señor en el papel sellado correspondiente? ¿porque no lo ha presentado Ruiz?

Si tal documento fuera una verdadera liquidacion, llevara este nombre, contendria partidas de cargo y data con la especificacion de mes, fechas y sus respectivos comprobantes, y puesto que segun él asegura, el Sr. Pueblita quedó conforme con tal liquidacion aparecia suscrita por él.

De otra manera, tal como está, lejos de favorecerle á Ruiz le perjudica, porque contiene la confesion de lo que recibió y no se vé en él recibo alguno, ni del Sr. Pueblita, ni de Lopez de conformidad de Pueblita.

Ese simple papel sin forma y sin valor alguno, no puede servir de descargo en el presente negocio á favor del acusado.

A escepcion de la carta número uno, las demas, aunque hubiesen sido reconocidas en forma, no servirian de prueba, porque son inconducentes.

Pasando á la prueba testimonial, no hace fé ninguna tampoco en este negocio por las razones siguientes:

Cuando en Abril del presente año el defensor de Ruiz ofreció ante el Juez 1º de Letras, que conocia del negocio, prueba de testigos, se mandó recibir esta, y se me notificó tal auto, y manifesté que me daba por

citado; mas en el mismo dia (18 de dicho mes), presenté un escrito recusando al C. Juez 1º y exponiendo al fin, que respecto á la prueba testimonial, y por lo que pudiera importar mas adelante á los derechos que represento, podia se me diera á saber el nombre de los testigos que fuesen á declarar, para promover lo conveniente.

El C. Juez 1º se inhibió del conocimiento del negocio en virtud de tal escrito, y pasó á V. la causa para su prosecucion. El término probatorio estuvo suspenso hasta que V. mandó se continuase su curso; y entonces y sin citárseme de nuevo para la prueba del reo, y sin hacérseme saber por lo mismo los nombres de los testigos para promover lo conveniente, como lo pedí en mi escrito de 18 de Abril, se recibieron y examinaron aquellos, resultando de todo esto que declararon sin citacion mia.

El derecho previene de una manera terminante, que no valga en juicio el dicho de aquellos testigos que declaren sin citacion contraria; y así dice la ley 23 tit. 16 part. 3ª. Recibir debe el Juzgado la jura de los testigos ante que haga su testimonio: esta jura debe tomarse, yendo la parte adelante contra quien son aducidos, haciéndogelo ante saber é «señalándole el dia á que venga ver como juran.» «Otro sí decimos, que ningún testigo non debe ser recibido sin jura nin debe valer su dicho.» El Febrero, citado entre otros muchos autores, dice en la página 205 del tomo 3º párrafo 7º lo que sigue: «Debe tambien citarse á la parte contraria y señalarle dia y hora, por si quisiere asistir á ver juramentarlos (los testigos) pues cuando falta dicha citacion y juramento, no hace fé el dicho de los testigos»

El objeto de tal citacion es el de que la parte contra quien son presentados los conozca á fin de que pueda desde luego tacharlos y probar la tacha: por eso cuando yo he dicho en mi escrito de 18 de Abril, que respecto á la prueba testimonial que presentara el reo podia se me diese á saber el nombre de los testigos para promover lo

conveniente, se me debió haber hecho saber; el modo de hacerme saber el nombre de los testigos, era haberme citado para que los viese; protestar, á fin de conocerlos y poder tacharlos, como lo hubiera hecho efectivamente si se me hubiera citado para la recepcion de todos y cada uno de los testigos.

Tanto mas era indispensable tal citacion entonces, cuanto que en ese tiempo debia hacer la tacha de aquellos pues segun dice el propio Febrero en el párrafo 34 página 520 «Y si alguna de las partes tuviese que poner tacha á cualquiera de los testigos nuevos presentados en el plenario por la contraria, lo hará dentro del preciso término de los tres dias siguientes á aquel en que el testigo hubiera prestado su declaracion.»

No habiéndoseme avisado que dia iba á declarar tal ó cual testigo, no pude computar el término de los tres dias para poner las tachas respectivas; y por lo mismo no pueden perjudicar á los intereses fiscales que represento, las declaraciones de tales testigos por los motivos expresados.

No haciendo pues, fé sus dichos, me esquivo de examinar sus respectivas declaraciones, y hacer notar los graves defectos que contienen, tanto por lo incontestable de ellas en muchos puntos principales, por la razon que dan algunos de su dicho, por la vaguedad con que á varias preguntas declararon. Y solo si haré notar, que al tratarse de reconocer la firma del Sr. Pueblita, aseguran que es de él y de su puño y letra, cuando no debieron ni pudieron asegurar que fuera de su puño, siendo que no se la vieron personalmente poner, haciéndose por lo mismo sospechosos de perjurio.

Cuando se trata de reconocimientos de esta naturaleza, lo mas que pueden decir los testigos es, que por el giro ó corte de la letra y por su forma, en fin, les parece que se semeja á la firma ó letra de la persona de quien se trata. Testigos que de-

claran con tanta ligereza, por no decir con tanta falsedad, no deben ser creidos.

A este respecto dice el Sala mexicano en el tomo 4º, página 293, part. 69, lo siguiente: «Por último, es necesario tener presente que los peritos que se nombren para hacer la comparacion ó cotajo de letras, *no deben testificar con evidencia*, esto es, no han de asegurar que los escritos que han cotejado, son de un mismo puño, de una misma mano ó de una misma letra, sino que son parecidas, ó que creen son de un mismo sujeto; pues *de lo contrario, su testimonio debe ser desechado*, por que nada pueden afirmar, si no lo saben, como dice Gutierrez per aliquem sensum corporeum. El Farenacio asienta, que la identidad de unas letras con otras, no puede afirmarse de una manera evidente, así por la oscuridad de la materia, como por la experiencia que hay de la facilidad con que se imitan las mas difíciles. El que con arrojo, dice una ley Romana (ley Julianus, et. de act. empt. et vendt) asegure lo que no puede, *no debe ser creido*; y otra de partida, ley 23 tit. 16, part. 3ª previene: que ninguno puede testificar, si no sabe aquello que hubiese visto. Es un atrevimiento criminal y reprehensible deponer con evidencia de hechos que no se hubiesen presenciado, y que solo puede obrar una prudente credulidad, que es el regulador único que debe dirigir en esta materia á los peritos.»

Testigos, pues, que como los de Ruiz se han atrevido á asegurar que las firmas que aparecen en las cartas y demas papeles son del C. General Pueblita, llegando á asegurarlo con evidencia, cuando no las vieron poner, no deben ser creidos, y se los debe réputar como falsos, segun lo que acabamos de ver.

Además de esto, hay que advertir que los referidos testigos no son peritos, segun se dijo ya mas arriba; y por lo mismo, menos deben ser creidos.

Ahora bien, quienes en cosas tan evidentes han declarado con tan visible falsedad,

¿se podría creer que hayan declarado con verdad en los demás hechos que refieren? En contestación puede citarse aquel principio de derecho que dice: "quis semel est malus semper presumitur malus," que traduciendo al caso presente puede decirse, "quien alguna vez ha dicho mentira, se presume que siempre la dice."

Por último, hay que hacer notar un error de derecho en que incurre el reo, cuando del reconocimiento de las firmas pretende deducir la verdad de los hechos á que las cartas se contraen. Para esto es preciso recordar, que solo las libranzas y pagarés tienen en derecho el privilegio, de que una vez reconocidas las firmas, se entiende por confesada la obligación á que se contrae el documento en que aparecen puestas aquellas.

Mas no sucede así con otra especie de papeles donde se necesita que se reconozca materialmente el contenido del documento, y esto solo puede hacerlo la persona que lo hizo, ó aquellos que personalmente se lo vieron hacer.

Así es, que no limitándose los testigos mas que á reconocer las firmas del Sr. Pueblita, y no el contenido de ellas, por que no les consta, y no tienen tales papeles el privilegio que en derecho gozan las libranzas ó pagarés, no puede inferirse, que del reconocimiento de las firmas se venga al reconocimiento del contenido de los documentos ó cartas donde aquellas aparecen.

En conclusion; no haciendo prueba perfecta ni las cartas presentadas por Ruiz, ni los otros documentos como el número dos; ni el dicho de los testigos por los vicios jurídicos que se han notado, resulta que no ha probado Ruiz sus descargos; que no ha justificado haber exhibido al C. General Pueblita el valor de las reses que recibió en comisión, resulta que aún debo aquel valor, y que por lo mismo pesa sobre él la responsabilidad civil que ha sido también materia de este proceso; en consecuencia, si no la satisface en efectivo, deben ser remata-

dos en hasta pública los bienes que para ello se han asegurado.

En cuanto á la responsabilidad criminal, es palmaria y evidente; y ya que el reo en uno de sus escritos propone un ejemplo para probar sus conceptos, el que suscribe propondrá otro símil para hacer ver lo contrario.

Juan es propietario de una finca y encarga á Pedro que recoja las rentas que aquella produce; el inquilino pagó una vez el precio del arrendamiento con varios objetos; y no pudiendo Pedro realizarlos para entregar el dinero á Juan propietario, comisiona á Antonio para que haga aquella realización. Antonio lo verifica así, y no entrega el producto de los efectos realizados á Pedro. Muere este, y Antonio aprovechándose del fallecimiento de aquel, se queda en silencio, no entrega el producto de su comisión, ni á los herederos de Pedro para que se lo exhiban á Juan, ni á Juan mismo que vive y que reclama su pago.

El hecho de quedarse en silencio Antonio y no dar cuenta de su comisión á Juan, que sabe que es el dueño; el hecho de valerse de subterfugios para no desembolsar un dinero que no es suyo, sino el producto de su comisión; y en fin, el hecho de querer apropiarse una cosa que no le pertenece, ¿no es un delito? ¿no es un hurto, y con la circunstancia agravante de abuso de confianza?

Juan representa aquí la Hacienda pública federal; Pedro al General Pueblita, y Antonio á D. Francisco Ruiz. El Gobierno comisiona al referido General, para que imponga préstamos y los invierta en los gastos de guerra, que en aquella fecha eran forzosos para contrarrestar la revolución; el C. General, no pudiendo realizar las reses con que le fueron satisfechos los préstamos, comisiona á Ruiz Gaytan para que las realice y le remita su importe; y Ruiz lejos de entregar el producto del ganado, lo retiene y se resiste á entregarlo pretendiendo tergiversar los hechos para eludir su pago

¿no es esto un hurto, con la circunstancia agravante de abuso de confianza, y de que el hurto es cometido á la Hacienda federal, á la Nacion?

Por que no hay que equivocarse: las reses como producto de préstamos, pertenecían á la Hacienda pública; y por lo mismo, á la Hacienda pública pertenece el producto de aquellas; así es que quien hurta esos productos, roba á la Hacienda pública, pues á la Hacienda pública pertenecen las cosas robadas.

Hé aquí pues, como no solo no existe accion civil contra Ruiz, sino tambien accion criminal; hé aquí porque es competente la autoridad federal para perseguirle, pues la autoridad federal es la competente en asuntos criminales en que se versen los intereses del fisco federal; y ya hemos visto que á la Hacienda federal pertenece el producto de las reses, porque á la Hacienda federal pertenecian los préstamos que el C. General impuso para cubrir las necesidades del Ejército de la Nacion.

Se ha querido confundir la personalidad particular del C. Pueblita, en su personalidad pública, y se pretenden confundir tambien sus negocios como particular y sus operaciones como Gefe militar.

Como particular, le compraria sin duda á Ruiz la casa de que trata; y por lo mismo como particular le pagaría con dinero, como dice que le pagó con él que le enviaba con Mora, con reses que como particular tendría el C. General, hacia las operaciones á que Ruiz y sus testigos quieren contraerse; y como particular tendría tales ó cuales adeudos á favor de Ruiz ó de otras personas; pero tales negocios particulares nada tienen que ver con sus asuntos como Gefe.

El C. Pueblita era muy honrado, pundonoroso y muy íntegro; y por lo mismo debe entenderse que sus adeudos particulares los satisfizo con sus bienes propios, y no creo que ni el reo ni el defensor le hagan al C. General Pueblita, el insulto de que se haya tomado lo ageno para cubrir sus deu-

das, pues á esto equivaldria sostener que habia pagado estas con unas reses que pertenecian á la Hacienda pública, y no á él individualmente. ¿O es de creerse que el honrado General haya tomado lo que no le pertenecia para satisfacer sus deudas propias? ¿Es de presumirse siquiera que tan honrado caudillo republicano haya tomado lo de la Hacienda federal para pagarle á Ruiz el valor de cosas que haya comprado para sí? No en verdad, y por lo mismo, desde luego viene este convencimiento: que Pueblita pagó á Ruiz con su dinero y objetos propios los adeudos que con él tenia como particular; y que el producto de la venta de las reses que pertenecian al Erario federal, por ser de préstamos, no está satisfecho todavia por Ruiz, puesto que no lo ha probado. Así se comprende muy bien que Pueblita haya sido por una parte deudor de Ruiz y por otra acreedor.

Si Ruiz presentara una cuenta pormenorizada, exacta y ordenada tal como debe ser, se vería en el cargo y en la data la historia perfecta de los asuntos de ambos, y se palparía con entera evidencia, que unos eran los negocios que el General hacia con Ruiz y que se los satisfacía con sus bienes propios, y otros eran los concernientes á la comision que recibió Ruiz de Pueblita, de enagenar las reses que pertenecian al Erario por ser adquiridas por préstamos forzosos.

Pero Ruiz, en vez de presentar sobre esto una cuenta pormenorizada, ordenada, comprobada, exhibe datos imperfectos, confusos, equívocos, sin duda para que en esta confusion y enredo se pierda la verdad de los hechos, y no se vea con claridad y distincion la historia de los sucesos.

Mas tal confusion le perjudica ciertamente; por que si no se ve claro en el asunto, no puede decirse con entera conciencia que ha probado satisfactoriamente sus descargos, una vez que no hay claridad, precision ni orden en sus pruebas.

Si pues el mismo reo ha confesado que

tuvo varios negocios con el C. General Pueblita, siendo aquellos meramente particulares, y no pudiendo haber sucedido que aquel Gefe como hombre íntegro y honrado haya cubierto sus adeudos particulares con bienes ajenos, ni menos con objetos que pertenecían á la Hacienda pública, resulta en conclusion final, que las reses de que se trata no pudieron servir y no sirvieron para pagar las deudas privadas del General, y que por lo mismo Ruiz es responsable de su importe. Mas todavía: aún en el supuesto de que así hubiera sido, habría paga nula, porque no debiendo el individuo satisfacer sus compromisos con bienes de otro, si no es que dé su consentimiento expreso, ese otro debe decir de nulidad de tal pago, y en tal caso debe recoger lo que le pertenece y dejar al acreedor sus derechos á salvo contra su deudor ó sus herederos para que le paguen de nuevo con sus bienes propios y no con los bienes ajenos, y mas si ese otro es la hacienda pública, que está circuida de privilegios, y que por lo mismo no puede perder en manera alguna.

En el supuesto pues, de que fuera exacto lo que asegura Ruiz respecto á que el C. General Pueblita, le pagó sus deudas particulares con el producto de las reses, que ya se ha probado que eran de la Hacienda pública, no habiendo probado Ruiz que el Sr. Pueblita estuvo facultado por el Gobierno para pagar sus deudas privadas con bienes del Fisco, resulta la paga nula, y Ruiz estará entonces obligado á pagar á la Hacienda pública el valor del ganado, quedándole sus derechos á salvo contra el Sr. Pueblita, ó sus herederos para que le satisfagan el descubierto que en ese caso vendría á quedar, si es que tiene derecho para ello. Y siempre resultará Ruiz con responsabilidad criminal, porque si hubieran sido exactos los hechos como los supone, resultaría entonces que el General Pueblita, cosa imposible aun de suponerse, habría robado á la Hacienda pública, y que Ruiz habia sido cómplice en el robo, existiendo en ese caso la circunstan-

cia agravante de la persona moral que habia sido robada. Hé aquí pues, que de cualquiera manera que se examine la cuestion, aparece siempre contra Ruiz responsabilidad civil y criminal; y en consecuencia se vé con toda claridad que debe ser compelido á la satisfaccion de la una y de la otra.

Resumiendo: El cargo está probado con la confesion del reo, con los testigos del sumario y aun con los del plenario presentados por aquel, y sus propios documentos, pues á él si le perjudican.

El descargo no está probado con las cartas, porque no están reconocidas en la forma prevenida por las leyes, ni con los demas documentos, como el número dos, y lo que él llama liquidacion, porque á mas del vicio expresado, por lo que ví al primero, hay ademas la circunstancia de que no están en el papel sellado respectivo; y por lo mismo no hacen fé en juicio, segun el mandato expreso de la ley citada; no con los testigos del plenario, porque fueron recibidos sin citacion contraria, puesto que en el escrito de 18 de Abril manifestó el que habla, que por lo que pudiera importar á los derechos que representa, manifestaba que queria se le diera á saber el nombre de los testigos, esto es, que se le dieran á conocer, en fin, que se le citase, lo cual no se hizo; y aun cuando no tuvieran este defecto la prueba, no hacian sin embargo fé sus testimonios, puesto que aparecen falsos, en virtud de que al tratarse del reconocimiento de las firmas, aseguran lo que no vieron; por eso segun la doctrina citada, no deben ser creidos; y por último, tampoco está probado el descargo con tales comprobantes, porque habiendo tenido el reo varios negocios con el C. Pueblita como particular, y no presentándose una liquidacion clara, exacta y ordenada de tales operaciones, no puede verse con distincion si efectivamente quedó datado á Pueblita y con su consentimiento en su cuenta particular, el importe de las reses que remitió como Gefe militar, en comision á Ruiz; y antes bien es de entenderse, que no fué

así, por que en la integridad del General Pueblita, no cabe el que haya pagado sus adeudos personales con bienes de la Hacienda pública, cometiendo con esto un robo al Erario; y en fin, por que aun cuando así hubiera sido, y así se hubiera probado con toda claridad, y mas con los grandes privilegios que tiene la Hacienda pública, resultaría la paga nula, y en ese caso, Ruiz debería siempre satisfacer el importe de las reses, y debería ser considerado como cómplice de hurto, con la circunstancia agravante de ser la Nación, la Hacienda pública, la robada.

Por todo esto pues, el que suscribe pide á V. condene al C. Francisco Ruiz Gaytan, al pago de la cantidad que pesa sobre él.

Para concluir, manifiesta el que suscribe, que gratuitamente supone el defensor del acusado, que el que habla haya obrado en este negocio con la actividad que se ha visto por sugerencias extrañas, puesto que únicamente lo ha hecho en cumplimiento de su deber, como lo hizo á su vez el anterior Promotor C. Lic. Néstor Caballero, á quien no puede suponerse instigado por nadie, sino tambien impelido por su propio Ministerio; agregando de paso, que no es exacto que el C. Lic. Torres sea el autor de los escritos presentados, pues es abogado diverso el que los redacta, el cual si no los ha firmado, ha sido porque no ha juzgado que sea necesario.

Cumpliendo pues el que suscribe con el deber que le impone la ley, termina pidiendo se provea en todo de conformidad, por ser de justicia.

Morelia, Julio 27 de 1873.—*M. Torsida*
—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 31 de 1873.—*Isidro Aleman*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Mayo 22 de 1873.—Vista esta causa instruida contra Don Francisco Ruiz Gaytan, por sospechas del delito de defraudacion de intereses federales: las diligencias del sumario: la confesion con cargos hecha al acusado y sus respuestas; las pruebas rendidas por su defensor; lo alegado por este y pedido por el Ministerio fiscal: la citacion para sentencia y cuanto mas convino.

Resultando: que este proceso tuvo su origen en la denuncia que el C. Felipe Madrigal hizo, de que el procesado Francisco Ruiz recibió una partida de ganado por orden del General D. Manuel García Pueblita para su venta, con calidad de situar el dinero procedente de la realizacion del ganado, donde estuviese la brigada que mandaba el nominado General; y que habiendo vendido el ganado, no produjo la cuenta respectiva ni cumplió con el encargo de remitir el producido.

Que en tales hechos se fundó el cargo de defraudacion de intereses del Erario federal que se hizo á D. Francisco Ruiz Gaytan.

Que este cargo podia resultar, ó bien de que el procesado hubiese recibido comision oficial del General García Pueblita, para vender las reses á fin de hacer pago á la Hacienda federal, y abusando de su comision hubiese tomado para sí el ganado mismo ó su valor, ó de que en connivencia con el General Pueblita y con pleno conocimiento de que las reses pertenecian al Erario federal, y aquel abusando del mando que se le habia confiado, las distraía de su objeto, hubiese coperado á este criminal proceder.

Que en el primer aspecto, no hay pruebas suficientes para fundar el cargo, porque en ninguna de la diligencias del proceso se hace mérito de que el General Pueblita, con su carácter oficial y en ejercicio de las facultades que para proveer de recursos, se dice le habia otorgado el Gobier-

no nacional, hubiese investido á Ruiz del carácter de agente subalterno, depositario ó ejecutor de intereses pertenecientes al Erario federal, ó para cobrar impuestos ordinarios ó extraordinarios y embargar y rematar intereses de particulares, con objeto de hacer estos efectivos.

Que por el contrario, lo expuesto por el mismo denunciante sobre que aconsejó al referido General que demandase judicialmente á Ruiz, y que sobre el apoderado particular de aquel Sr. y no un empleado público tuvo á su cargo exigir la liquidación y pago á Ruiz, desvanece la idea de que el General con carácter público y para el servicio público, hubiese investido á Ruiz de la comisión de venta del ganado que este confiesa haber recibido.

Que en el segundo aspecto; Ruiz había contraído la responsabilidad de codelincuente, cómplice ó receptor; pero en todo caso, el reo principal sería el finado General D. Manuel García Pueblita, y no está probado y ni aun siquiera existen presunciones de que este hubiese abusado de las facultades de que estuvo investido, tomando intereses particulares so-color de préstamo ó contribuciones extraordinarias, para aprovecharse de ellos; y que por el contrario, respecto del ganado de que se trata, el mismo General expuso en su carta de fojas 105, que se había cargado en cuenta su valor, lo que excluye toda idea de abuso ó mala versación de estos intereses.

Que aun cuando así no fuera, mientras no se gloce y depure la cuenta del General Pueblita, no puede afirmarse que abusó ni que tuvo algún descubierto; y por consiguiente, tampoco puede tenerse como cierto que Ruiz ó otro haya sido su codelincuente ó cómplice.

Que en virtud de las consideraciones que preceden, y atentas las constancias de autos, los hechos que dieron origen á este proceso contra Ruiz, no pueden clasificarse legalmente sino como un mandato particular del C. Manuel García Pueblita al C. Fran-

cisco Ruiz Gaitan; y en este aspecto nada tiene que ver el Erario federal con las cuentas seguidas entre mandante y mandatario, habiendo este á mayor abundamiento justificado que rindió cuenta con pago; y por último, teniendo presente que la ley 12 tit. 14 part. 3ª previene: que no habiendo contra el acusado una prueba tan clara como la luz, se le absuelva; y el artículo 118 de la Constitución federal, que apareciendo que el procesado no merezca pena corporal, se le ponga en libertad bajo de fianza; conforme á la disposiciones citadas, se declara. Primero: se absuelve á D. Francisco Ruiz Gaitan, del cargo de defraudación de intereses federales, poniéndosele en libertad bajo de fianza, entre tanto los Tribunales Superiores revisan este fallo. Segundo: se dejan á salvo los derechos del acusado contra el denunciante y su primer defensor, para que los deduzca cuando le convenga en la vía y forma legal.

Hágase saber; remítase copia certificada de esta sentencia al Semanario Judicial, y elévese la causa al Tribunal de Circuito para su revisión. El C. Lic. Jacobo Ramírez, Juez segundo suplente de Distrito del Estado de Michoacan, definitivamente juzgando, así lo decretó y firmó. Doy fé.—*Lic. Jacobo Ramírez*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 31 de 1873.—*Isidro Aleman*.

Pedimento del C. Fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que D. Francisco Ruiz Gaitan, recibió en comisión del C. General Manuel García Pueblita, una partida de ganado, compuesta de docientas setenta y siete cabezas, que han sido justificadas en dos mil setecientos seis pesos, seis reales. Confiesa Gaitan el cargo y se exceptiona con haber entregado el producto

al referido finado Pueblita. En vez de haber probado la excepción, se encuentra ésta contradicha por los datos que aparecen en la causa. Consta así mismo que Pueblita obraba en el caso, con autorización del Gobierno de la República, imponiendo préstamos para la manutención de sus tropas; y que de estos préstamos procedieron los animales realizados por Gaitan, quien hasta ahora no ha podido demostrar el finiquito de su cuenta.

Es indudable la competencia de los Tribunales de la federación en el asunto, supuesto que ésta es parte interesada (artículo 97 fracción 3ª de la Constitución). La federación pudo haber exigido cuenta ó Pueblita; pero si no la ha hecho, no por esto deja de tener acción contra todo el que administra sus bienes y se los apropia. Y esto sucede al presente. Gaitan fué mandatario de Pueblita; mas sin ignorar que Pueblita obraba como General, en nombre del Gobierno Nacional. En suma, Gaitan administró bienes de la federación, sin mandato directo de la misma, hallándose sin embargo en el caso de darle cuentas, conforme á la ley 27, tít. 12 Part. 5ª.

La confesión de Gaitan escusa de mejor prueba en el asunto, siendo como es hecha judicial, clara, espontánea y contrasí. "Grande es la fuerza que ha la conciencia que hace la parte en juicio, estando su contendor delante. Ca por ella se puede librar la contienda, bien así como si lo que conocen, fuesse probado por buenos testigos, ó por verdaderas cartas. E por ende el juez ante quien es hecha la conciencia, deve dar luego juicio afinado por ella; si sobre aquella cosa que conocieron, fué comenzado pleyto ante por demanda, ó por respuesta. Eso mismo desimos, si la conciencia fuese hecha en juicio, en pleyto criminal, en qual manera quier" (libro 2 tít. 13 Part. 3ª).

Supuesta la confesión del reo, le incumbe la prueba de sus excepciones, conforme al sabidísimo principio "*in exceptionibus, dicendum est, reum partibus actoris fungi*"

TOMO V.—PARTE II.

oportere" (lib. 19 D. de probat). Esta prueba no ha sido rendida. Con arreglo á las disposiciones vigentes, los que manejan caudales de la Hacienda pública, y en vez de devolverlos los conservan convirtiéndolos á sus propios usos, son reos de peculado, y en este caso se halla D. Francisco Ruiz Gaitan (L. 14, tít. 14, Part. 79). En vista de cuyas consideraciones, el Promotor fiscal pide: que dándose por compurgado con la prisión y molestias sufridas á D. Francisco Ruiz Gaitan, se le condene al pago de dos mil setecientos seis pesos, que de la Hacienda pública ha detenido en su poder, revocándose al efecto la sentencia de primera instancia.

Querétaro, Junio 17 de 1873.—*Luis Castañeda*.

Es copia que certifico. Querétaro, Octubre 24 de 1873.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Querétaro, Julio 15 de 1873.—Vistos:—D. Francisco Ruiz Gaitan, casado, mayor de edad, talabartero y vecino de Morelia, fué comisionado el año de 1859 por el C. General García Pueblita, finado, á efecto que realizara la partida de reses que le remitió, tomadas de distintas haciendas, efectos por contribuciones y préstamos impuestos á los dueños de ellas, á los que para hacer efectivo el cobro se embargaron algunos animales que fueron vendidos por Gaitan á distintas personas, segun se dirá despues, sin que hubiese dado cuenta con el producido al General, quien habia procedido al embargo enunciado con autorización del Supremo Gobierno general, para atender á los gastos de la guerra suscitada por el golpe de estado del C. General Ignacio Comonfort; y por cuanto se denunció el delito de mala versación de caudales públicos, por el C. Felipe Madrigal, se avocó en el conocimiento del proceso la autoridad judicial en inqui-

sicion del delito enunciado y de sus delinquentes.

En vista de lo expuesto y de todo lo demas relativo que consta en la causa, tiene que considerarse.

Primero: que por la confesion de Gaitan, resulta probado la comision de que se ha hecho mérito, y que por ella vendió una partida de ganado á distintas personas, entre las que se citó á los tablajeros, á la vez que reconoció las partidas ó los asientos del cuaderno fojas 10 vuelta, que hacian relacion de esos animales que recibiera en comision, en número de doscientos setenta y siete, con valor de dos mil setecientos seis pesos, seis centavos, segun el valúo de los CC. Francisco Mata y Gregorio Patiño.

Segundo: que contando con la confesion del reo que produce prueba plena en los negocios civiles y criminales, segun lo preceptuado por la ley 2ª tít. 13 part. 3ª, se le constituyó ademas convicto sobre la realizacion del ganado y falta de cuentas. I. Con lo depuesto por el testigo C. Ignacio de Alva, apoderado del General Pueblita, fojas 3 frente, refiriéndose en todas sus partes al dicho del acusador, con la particularidad de contraerse el testigo al mismo General, sobre que "el ganado era bastante gordo," vendido por Ruiz á razon de seis pesos bueyes, cuatro las vacas y veinte reales los becerros. II. Con lo depuesto por los testigos CC. Gregorio Patiño, que compró de sesenta á setenta becerros el año de 1861; de Gregorio Alvarado, refiriéndose á Pueblita, quien le dijo que Gaitan no habia dado cuenta, fojas 50, de quinientas á seiscientas reses que habia recibido, cuyo testigo fué presencial, lo mismo que los anteriores, á la vez que Andres Rangel con respecto á otras partidas de ganado que recibió el reo; de manera, que contando con lo expuesto, resulta confeso y convicto en no haber dado cuentas con el ganado que tuvo en comision y ha sido perfecta y acabada la prueba testimonial, segun lo prevenido en la ley 32, tít 16 part. 3ª.

Tercero: que las partes, es decir, el reo, el Ministerio público y los testigos en general, han estado conformes en el objeto que tuviese la realizacion del ganado, ordenada por el General Pueblita, es decir, para los gastos de la guerra que sostuviera el gobierno general, en cuya virtud le pertenecia el capital pecuniario; y la presente actuacion es de las comprendidas y á que se refiere la fraccion 3ª del artículo 99 de la Constitucion de la República, y afecta por tanto á las autoridades federales del poder judicial.

Cuarto: que la criminalidad de Gaitan, no solo parte de la alternativa que fija el C. Juez de primera instancia en su sentencia, sino que tambien cabe en particulares, que sin ser empleados ó complices, se constituyen reos principales con responsabilidad directa, como la que corresponde al furta-dor de caudales propios de la federacion; y en el caso presente, por la falta de precio de las reses vendidas, que le era afecta segun lo dicho antes.

Quinto: que el reo no ha probado su excepcion, ni la aducida fué directa á su objeto, ó que fuese único, es decir, sobre las doscientas setenta y siete reses, cuya falta ha motivado el cargo, puesto que no hay constancia de las otras que faltasen para el completo de las quinientas á que se refirió Pueblita, segun lo dicho antes bajo el núm. segundo, y porque aquellas no constituyeron único contrato que sobre el particular tuviese el reo, sino que fueron distintos segun lo confesó este en su escrito, fojas 18 frente al fin; con respecto á otras partidas de ganado que fueron objeto de contratos particulares, sobre remision de reses en el año de 1869, fojas 21 frente, por los que el año de 1862 ya Pueblita era deudor de Gaitan, en cuyo caso se explica bien el contenido del documento visible á fojas 101 frente, fecha 27 de Octubre de 1870 y al de 112 frente por su identidad de razon, permitiéndoles su legalidad, es decir, aplicándolos á contratos particulares que tu-

viesen entre sí Gaitan y Pueblita por los adeudos de este. "El me adeudaba, dice el reo, diversas sumas por ministraciones parciales que hice á la persona que me designó; y para hacerme pago de tales adeudos y para situar fondos en mi poder para gastos particulares, me envia ganado....." lo que demuestra lo dicho antes con respecto á los documentos citados, que por su vaguedad son aplicables á los contratos particulares y no al ganado que entregase Pueblita en 1869 para su realizacion, que sirviese para los gastos de la guerra, sobre cuyo particular no ha habido prueba por parte del reo, y en su contra ha existido lo depuesto por los testigos citados que se refieren al General Pueblita, á quien le oyeron decir de que el reo no habia dado cuentas.

Sesto: que á los documentos de que antes se ha hecho mérito, se les ha puesto la tacha de nulidad por el Ministerio público, por lo general y vago de su contenido, por no haberse reconocido en forma, por no ser ratificados por testigos que los viesan firmar, cuyos requisitos para que produzcan fé, exigen las leyes 114 y 119, tít. 18 part. 3ª, á la vez que los particulares han tenido y tienen obligacion de hacer uso del papel sellado relativo á sus cuentas y documentos, segun se previene en la fraccion 10ª del artículo 17 de la ley de 14 de Febrero de 1856, so pena de no hacer fé en juicio, segun lo determina su artículo 53 referente á la circular de 16 de Agosto de 1862, bajo la multa que fija el artículo 51 de la ley citada, que es aplicable al documento de fojas 112 frente, por ser de cuentas habidos ente el reo y Pueblita, y no al de fojas 101 frente, por que este se halla firmado por persona que no es parte en la actuacion y aducido como defension y contando con el principio sobre que *afflictio non estatdenda afflictio*.

Sétimo: que la prueba testimonial aducida por el defensor del reo, no surte demostracion legal en virtud de las razones

expuestas en el párrafo quinto, que son aplicables á aquella porque su dicho no fué directo á las reses en cuestion, sino general, segun lo depuso el mismo D. Ignacio de Alva apoderado de Pueblita, y solo así concuerda su dicho con su primera declaracion, sobre que el General le dijese que el reo no habia dado cuentas; y tambien fué general el dicho de los testigos CC. Cruz Lopez, Guillermo Zamudio, Antonio Mora y Epitacio Huerta, relativo (el dicho) á las cuentas en general, pues de otra manera resultaria un cargo al reo, por haber admitido en dacion de pago que se le hiciera por la venta de la casa, con ganado que no era de la propiedad de Pueblita, por lo cual, y contando con el principio de que *odio restringi et favores convenit ampliari*, se explica que aquel era propiedad del General, de lo que podia disponer, lo que le era porhibido con el fianado tomado por adeudo de contribuciones, ó con el que se hizo efectivo el prestamo aplicado al Gobierno general para sus atenciones de guerra, á lo que se agrega no haberse aducido en juicio la escritura relativa al contrato de la casa; y sobre todo no haberse presentado por el reo la cuenta de liquidacion comprobada y aceptada por Pueblita, y en su defecto por el Cefe de Hacienda respectivo, que habria dado el finiquito que se necesita en los negocios de cuentas que no se prueban con testigos ni con documentos referentes, como se estiman las cartas presentadas, visibles en la causa y sin que tampoco baste el reconocimiento que hicieron los testigos, de la firma puesta en aquellas y en los demas documentos, por que no produce prueba segun la ley 119, tít. 18 part. 3ª antes citada, ó como dice Baldo. *Scriptura ex qua fide comparatio nihil aliud est nisi argumentum, á similli et verosimili*.

Por todo lo expuesto, mediante los fundamentos expresados, ley 27, tít. part. 5ª, la razon de la ley 14, tít. 14 part. 7ª, ley 20, tít. 12, part. 5ª citada, fraccion 1ª artículo 1º del capítulo 1º: fraccion 1ª arti-

culo 53, artículo 16 capítulo 2º: fraccion 1ª artículo 22 de la ley de 5 de Enero de 1857: haciendo uso de la facultad que concede la ley 8ª, tít. 31 part. 7ª y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, fallo: Primera: se dá por compurgado á Don Francisco Ruiz Gaitan, el delito de hurto de caudales públicos pertenecientes á la federacion, de que se le hizo cargo, con el tiempo que ha sufrido de prision y con las molestias consiguientes de la presente causa. Segunda: se condena al mismo reo á la indemnizacion civil ó al pago de la cantidad de dos mil setecientos seis pesos seis reales, valor del ganado que tuvo á su cargo y del que no dió cuenta; y á satisfacer la multa de treinta y cinco pesos por la suma que arroja la partida del documento de fojas 112 frente, cuya multa se entregará á la oficina del papel sellado de Morelia, consecuente con lo prevenido en el artículo 59 de la ley de 14 de Febrero de 1856, á efecto que se remita á la oficina general de la renta, y la indemnizacion civil á la Gefatura de Hacienda de Morelia.

Y quedando revocada la sentencia que pronunció el C. Juez segundo suplente de Distrito de la capital, últimamente citada, á 22 de Mayo del presente año; notifíquese y sin ejecutar, remítase la causa á la Corte Suprema de Justicia para su revision consecuente con el artículo 33 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y al efecto, librese oficio con insercion de esta sentencia al Juez caucinado, que la notifique al reo y nombre defensor para la tercera instancia, ó en su caso, se le provea de oficio de los CC. abogados defensores de pobres que residan en la Capital de la República, cuyas diligencias de notificacion se devolvérán á la mayor prontitud; y por cuanto lo que aparece en la causa con respecto al C. Lic. Mariano de Jesus Torres, dígame al Juez ya citado, mando compulsar testimonio de lo conducente á aquel letrado y proceda en su contra por cuerda separada, en inquisicion del delito prevaricato que se de-

nuncia á fojas 142 vuelta; encárguese á su actuuario, no omita poner la filiacion de los reos; remita en lo sucesivo el parte referente á la declaratoria de bien preso, así como se guarden las formalidades propias en estos juicios, sin admitir el estroño de escritos, como los que se notan en la causa, que la han dilatado en perjuicio de la administracion de justicia.

El C. Magistrado de Circuito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal*.—*Ramon Reynoso*.

Es copia que certifico. Querétaro, Octubre 24 de 1873.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador General de la Nacion dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Michoacan, se siguió causa contra D. Francisco Ruiz Gaitan por defraudacion de fondos al Erario federal.

El que suscribe cree inútil y aun superfluo, hacer un extracto de las constancias del proceso; porque está hecho concienzuda y fielmente, en la laboriosa parte expositiva de la sentencia de vista, pronunciada por el Magistrado de Circuito de Querétaro y constante á fojas 10 y siguientes del Toca respectivo.

Refiriéndose pues á ese notable documento, por lo que mira á la exposicion de los hechos, el Procurador general pasa á encargarse de las sentencias pronunciadas en 1ª y 2ª instancia.

El Juzgado de Distrito comienza la suya, estableciendo la siguiente alternativa: ó se supone que el procesado recibió comision oficial del General Pueblita para vender las reses á fin de hacer pago á la Hacienda federal, y abusando de su comision tomó para sí el ganado mismo ó su valor, ó se supone, que obraron en conciencia ambos, y con pleno conocimiento de que las

reses pertenecían al Erario federal, y abusando el General del mando que se le había confiado, las distrajo de su objeto, y Ruiz Gaitan cooperaba á este criminal proceder.

En el primer caso, según el Juez de Distrito, no hay pruebas suficientes para fundar el cargo, porque en ninguna de las diligencias del proceso se hace mérito de que el General Pueblita, con su carácter oficial y en ejercicio de sus facultades, hubiese investido á Ruiz Gaitan del carácter de agente depositario ó ejecutor de intereses pertenecientes al Erario federal, ó para cobrar impuestos, embargar y rematar intereses de particulares, con objeto de hacerlos efectivos. El Juez cree por el contrario, encontrar una prueba que á su juicio desvanece la idea de que el General Pueblita hubiese investido á Ruiz Gaitan con un carácter público para la comision de venta del ganado, que esto confiesa haber recibido.

En el segundo caso, continúa el Juez, Ruiz Gaitan aparecería como co-delincuente, cómplice ó receptor, y el reo principal sería en todo caso el General Pueblita; pero á juicio del mismo Juez, no está probado, que ni aun siquiera existen presunciones de que el General hubiese abusado de las facultades de que estuvo investido, tomándose intereses particulares so-color de préstamos ó contribuciones, para aprovecharse de ellos; y si hay constancias que escluyan toda idea de abusos ó mala versacion de estos intereses, aun cuando así no fuera, agrega el Juez, mientras no se glose y depure la cuenta del General Pueblita, no puede afirmarse que abusó ni que hubo algun descubierto; y por consiguiente, tampoco puede tenerse como cierto que Ruiz ó otro haya sido co-delincuente ó cómplice.

Concluye de aquí, que atentas las constancias de autos, no puede considerarse á D. Francisco Ruiz Gaitan, sino como mandatario particular del General García Pueblita; y por lo mismo, nada tiene que ver el Erario federal con las cuentas seguidas entre mandante y mandatario, cuando á ma-

yor abundamiento, este ha justificado que rindió cuenta con pago. Por tales fundamentos, y apoyado en la ley 12, tít. 14, part. 3.^a y artículo 118 de la Constitución federal, absolvió á Ruiz Gaitan del cargo de defraudacion de intereses federales.

Causa profunda pena que el Juez de Distrito de Michoacan, haya inventado estos argumentos de imaginacion, para ponerse frente á frente de los hechos comprobados, y en opinion abierta con la verdad, con la justicia y con el derecho. Entre los miembros de la alternativa presentada por el Juez de Distrito, hay un medio termino que está en perfecto acuerdo con la verdad, y marca de una manera inequívoca el camino que debe seguir la justicia. D. Francisco Ruiz Gaitan no fué ciertamente un empleado público; tampoco puede decirse que él y el General Pueblita formaron un complot para defraudar los fondos públicos; pero de las constancias del proceso y de la confesion misma de Ruiz Gaitan, aparece plenamente probado, 1.^o: que dicho Ruiz Gaitan recibió, como pertenecientes al Erario público, cierta cantidad de reses; 2.^o: que á estas les fijó precio, á fin de que el mismo Ruiz Gaitan procurase su venta; 3.^o: que se le impuso la obligacion de enterar el producto de esa venta para que sirviese á las atenciones de la guerra; 4.^o: que Ruiz Gaitan aceptó la comision, y 5.^o: que se han pasado muchos años sin que haya enterado á las arcas federales la cantidad, producto de la venta. No se necesita mas para inferir con plena justicia, que la ha defraudado, y queda así demostrado, que la sentencia de 1.^a instancia es notoriamente injusta. El Procurador general se ha conformado con hacer esta apreciacion genérica, por que no cree necesario, respecto los bien motivados fundamentos en que descansa la sentencia de vista, la cual pide sea confirmada, no solo en su parte principal, sino tambien en los puntos relativos al C. Mariano de Jesus Torres, y al actuario que funcionó en la 1.^a instancia.

México, Agosto 9 de 1873.—*L. Guzman.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 13 de 1873.—Vista la causa instruida contra D. Francisco Ruiz Gaitan, por haber dispuesto de unas reses que el finado General D. Manuel García Pueblita puso bajo su custodia, y cuyas reses fueron tomadas por dicho General y embargadas á diversas haciendas, para hacer efectivo el pago de contribuciones y préstamos impuestos á esas fincas, de cuyas reses dispuso luego el encausado vendiéndolas á distintas personas. Visto el fallo de 1ª instancia pronunciado por el Juzgado de Distrito de Morelia en 22 de Mayo próximo pasado que declara; 1º: se absuelve á Don Francisco Ruiz Gaitan del cargo de defraudacion de intereses federales, poniéndoselo en libertad bajo de fianza, en tre tanto los Tribunales Superiores revisan este fallo; 2º: se dejan á salvo los derechos del encausado contra el denunciante y su primer defensor, para que los deduzca cuando le convenga en la vía y forma legal. Vista la sentencia de 2ª instancia, fecha 15 de Julio último, que determina; 1º: se da por compurgado á Don Francisco Ruiz Gaitan del delito de hurto de caudales públicos pertenecientes á la federacion, de que se le hizo cargo, con el tiempo que ha sufrido de prision y con las molestias consiguientes de la presente causa; 2º: se condena al mismo reo á la indemnizacion civil ó al pago de la cantidad de dos mil setecientos seis pesos seis reales, valor del ganado que tuvo á su cargo y del que no dió cuenta; y á satisfacer la multa de 35 pesos por la suma que arroja la partida del documento de fojas 112 frente, cuya multa se entregará á la oficina del papel sellado de Morelia, consecuente con lo prevenido en el artículo 59 de la ley de 14 de Febrero de 1856, á

efecto de que se remita á la oficina general de la renta, y la indemnizacion civil á la Jefatura de Hacienda de Morelia. Visto lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Procurador general, sobre que se confirme la sentencia de vista; los apuntamientos de informe presentados por el Lic. Lucio Padilla, como patrono del procesado, con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino. Considerando: que de las mismas constancias del proceso, resulta plenamente probado el delito de defraudacion de intereses fiscales, de que se hizo cargo al encausado: de conformidad con lo pedido por el C. Procurador general, y por los propios legales fundamentos en que descansa el fallo de 2ª instancia, se decreta: que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Querétaro, en 15 de Julio próximo pasado, que decreta; 1º: se dá por compurgado á D. Francisco Ruiz Gaitan del delito de hurto de caudales públicos pertenecientes á la federacion, de que se le hizo cargo, con el tiempo que ha sufrido de prision y con las molestias consiguientes de la presente causa; 2º: se condena al mismo reo á la indemnizacion civil ó al pago de la cantidad de \$2706. 6 reales, valor del ganado que tuvo á su cargo y del que no dió cuentas, y á satisfacer la multa de \$35 por la suma que arroja la partida del documento de fojas 112 frente, cuya multa se entregará á la oficina del papel Sellado de Morelia, consecuente con lo prevenido en el artículo 59 de la ley de 14 de Febrero de 1856, á efecto que se remita á la oficina general de la renta, y la indemnizacion civil, á la Jefatura de Hacienda de Morelia.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes.

Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron

los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Enero 15 de 1874.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Manuel Salas Orea, José M. Lopez, Manuel Antonio Vargas, Anselmo Martinez, Francisco Jimenez y José M. Hernandez, contra la sentencia pronunciada por el Jefe político de Córdoba, que los condenó á la pena de muerte como reos de varios actos de robo con asalto y heridas, cometidos en cuadrilla.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los reos Manuel Salas Orea, José M. Lopez, Anselmo Martinez, Manuel Antonio Vargas, Francisco Jimenez y José M. Hernandez, sentenciados á sufrir la pena capital por la Gefatura política del Canton de Córdoba, después de haber ocurrido infructuosamente á la H. Legislatura en solicitud de la gracia de indulto de dicha pena, piden amparo y proteccion ante la Justicia federal, contra la sentencia ejecutoria pronunciada contra ellos, porque con ella se les violan las garantías consignadas en favor del hombre, en los artículos 14, 23 y 29 del Código fundamental de la República; y al mismo tiempo solicitaron la suspension del acto reclamado, que les fué concedida inmediatamente y comunicada por el telégrafo al Jefe político, quien acatando como debia, lo dispuesto por el Juzgado, contestó de conformidad.

Pedido el informe á dicha autoridad, lo ha remitido manifestando: que es cierto que ha juzgado á los quejosos por los delitos de robo con asalto y heridas y otras circunstancias agravantes, cometidos contra varias personas en sus propias casas, imponiéndoles la pena de muerte que no les fué indultada y ha sido mandada ejecutar, acompañando copia del acuerdo respectivo de la H. Legislatura y la causa que se siguió á los quejosos. Este ministerio fiscal ha examinado atentamente el caso, y advierte por las constancias de la propia causa, que ninguno de los delitos porque han sido juzgados es el de asalto en camino, ni otro alguno de los que el artículo 23 de la Constitucion Federal permite que puedan castigarse con pena de muerte: que en consecuencia; y no pudiéndose suspender esa garantía y las demás que aseguran la vida del hombre, con arreglo al artículo 29 de dicho Código, es evidente que han sido violadas en sus personas las garantías, con el hecho de haberseles impuesto la pena capital, conforme á las leyes de 23 de Mayo de 1872, 18 de Mayo de 1871 y 3 de Mayo del corriente año, toda vez que esas disposiciones hacen extensiva la pena de muerte á otros casos que no comprende el citado artículo 23.

Este concepto está sostenido por una de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de fecha 24 de Julio de 1870, pronunciada en un juicio de amparo promovido por tres reos de robo con asalto en la casa de Pedro Carrizales, que se hallaba situada en el campo, á un cuarto de legua distante de un pueblo, y fué publicada en el Semanario Judicial de la Federacion, en la segunda parte, segundo tomo, página 142.

Por estos fundamentos, el suscrito Promotor pide al Juzgado; se sirva amparar y proteger á los quejosos contra la sentencia de muerte que pronunció en su causa el C. Jefe político de Córdoba, á fin de que pronuncie de nuevo lo correspondiente en derecho; quedando en consecuencia sin efecto la negativa de indulto acordada por la H.